

DISCURSO: LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO EN EL PERÚ

Muy buenos días, estimado docente y compañeros.

En esta oportunidad, voy a desarrollar un tema de gran importancia para la administración pública y el funcionamiento del Estado peruano: la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, actualmente regulada principalmente por el Decreto Legislativo N.º 1440, norma que establece las reglas para la planificación, administración y control de los recursos económicos del Estado peruano.

Hablar del presupuesto público es hablar de cómo el Estado organiza el dinero de todos los ciudadanos para atender las necesidades del país. Gracias al presupuesto se financian hospitales, colegios, carreteras, programas sociales, seguridad ciudadana, proyectos de infraestructura y servicios públicos esenciales. Por ello, el sistema presupuestario constituye uno de los pilares más importantes de la gestión pública.

El Sistema Nacional de Presupuesto Público forma parte de la Administración Financiera del Sector Público y es dirigido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Su finalidad principal es asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente, transparente y orientada al bienestar de la población.

Anteriormente, la regulación principal se encontraba en la Ley N.º 28411. Sin embargo, con el proceso de modernización del Estado peruano, esta fue reemplazada y actualizada mediante el Decreto Legislativo N.º 1440 en el año 2018, buscando mejorar la calidad del gasto público, fortalecer el presupuesto por resultados y modernizar el sistema presupuestario del país.

Uno de los aspectos más importantes de esta norma es que define al presupuesto público como un instrumento de gestión del Estado orientado al logro de resultados en favor de la población. Esto significa que el presupuesto no debe verse solamente como números o montos económicos, sino como una herramienta destinada a resolver problemas sociales y mejorar la calidad de vida de las personas.

La ley también establece diversos principios fundamentales que orientan el manejo del presupuesto público. Entre ellos destaca el principio de legalidad, según el cual ningún gasto puede realizarse si no ha sido previamente autorizado por ley. Este principio es esencial porque evita el uso arbitrario de los recursos estatales y garantiza un control adecuado del dinero público.

Asimismo, encontramos el principio de transparencia, que busca que la ciudadanía pueda conocer cómo se distribuyen y ejecutan los recursos del Estado. Actualmente, el gobierno peruano ha impulsado mecanismos de acceso a la información presupuestaria para fortalecer la rendición de cuentas y combatir la corrupción. Incluso, en los últimos años se han incorporado modificaciones normativas para reforzar las obligaciones de transparencia presupuestal de entidades públicas y empresas del Estado.

Otro principio importante es el de eficiencia, el cual exige que los recursos públicos sean utilizados de la mejor manera posible. Esto implica evitar gastos innecesarios y asegurar que cada sol invertido genere beneficios reales para la sociedad. Relacionado con ello se encuentra el principio de responsabilidad fiscal, cuyo objetivo es mantener la estabilidad económica del país y evitar déficits excesivos que puedan afectar las finanzas públicas.

En el Perú, el proceso presupuestario comprende varias etapas fundamentales. La primera es la programación presupuestaria, donde el Estado define sus prioridades y objetivos. Luego viene la formulación, etapa en la cual las entidades públicas elaboran sus propuestas de presupuesto. Posteriormente se realiza la aprobación, función que corresponde al Congreso de la República. Después se desarrolla la ejecución presupuestaria, es decir, la utilización efectiva de los recursos asignados. Finalmente, se realiza la evaluación del presupuesto para verificar si se cumplieron las metas planteadas.

Un aspecto moderno e interesante del sistema presupuestario peruano es el llamado “presupuesto por resultados”. Este enfoque busca que el gasto público no solo se limite a ejecutar dinero, sino que produzca cambios concretos y medibles en la sociedad. Por ejemplo, no basta con asignar presupuesto al sector salud; también se debe verificar si efectivamente disminuyó la desnutrición infantil, mejoró la atención médica o aumentó el acceso a medicamentos.

Gracias a este enfoque, el Estado busca orientar sus políticas públicas hacia resultados verificables. Esto representa un avance importante en comparación con modelos tradicionales donde únicamente importaba gastar el presupuesto sin evaluar su impacto real.

Actualmente, el presupuesto público peruano alcanza cifras históricas. Según información oficial del [Ministerio de Economía y Finanzas](#), el Presupuesto Público para el Año Fiscal 2025 asciende aproximadamente a 251 mil millones de soles, destinándose importantes recursos a sectores como seguridad ciudadana, salud, educación, transporte e infraestructura. Además, cerca del 45% de los recursos se orientan directa e indirectamente a las regiones del país, fortaleciendo así el proceso de descentralización.

Sin embargo, pese a contar con grandes presupuestos, el Perú enfrenta todavía diversos problemas relacionados con la ejecución del gasto público. Muchas veces, gobiernos regionales y municipales no logran utilizar completamente los recursos asignados debido a problemas de gestión, burocracia, falta de capacidad técnica o actos de corrupción. Esto provoca retrasos en obras públicas y afecta directamente a la población.

Por ejemplo, en algunos casos existen proyectos de inversión paralizados por deficiencias técnicas, problemas administrativos o falta de planificación adecuada. Esto demuestra que no basta con tener dinero disponible, sino que también se necesita una administración eficiente y responsable de los recursos públicos.

Asimismo, el control presupuestario cumple una función fundamental dentro del sistema. La Contraloría General de la República y los órganos de control institucional supervisan la legalidad de la ejecución del presupuesto, verificando que los fondos públicos sean utilizados conforme a la ley. Del mismo modo, el Congreso de la República ejerce funciones de fiscalización sobre la ejecución presupuestaria.

Otro aspecto relevante es la importancia de la participación ciudadana y la transparencia. Actualmente, el Estado peruano promueve herramientas informativas y guías para que los ciudadanos puedan conocer cómo se distribuye el presupuesto nacional y cuánto dinero reciben las regiones y municipalidades. Esto fortalece la vigilancia ciudadana y permite exigir una mejor gestión pública.

Desde una perspectiva jurídica, la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto tiene una estrecha relación con diversos principios constitucionales, especialmente con el principio de legalidad, el control del gasto público y la búsqueda del bienestar general.

Además, constituye un mecanismo fundamental para hacer realidad los derechos sociales, ya que mediante el presupuesto se financian políticas públicas vinculadas a salud, educación, vivienda y protección social.

En conclusión, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto representa una herramienta esencial para el funcionamiento del Estado peruano. Gracias a esta norma, se regula cómo se obtienen, distribuyen y utilizan los recursos públicos, garantizando que el dinero del Estado sea administrado de manera responsable y orientada al desarrollo nacional.

No obstante, el verdadero desafío no radica únicamente en contar con buenas leyes, sino en lograr una gestión pública eficiente, transparente y libre de corrupción. Solo así el presupuesto público podrá cumplir verdaderamente su finalidad: mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y contribuir al progreso del país.

Muchas gracias.